



## El PSC y sus socios del tripartito bloquearon la investigación de CiU

Maragall dijo en sus memorias que ningún socialista le apoyó para aclarar las comisiones

CARLOS SEGOVIA / Madrid  
La dirección del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y sus socios del tripartito bloquearon el intento del presidente de la Generalitat en aquella época, Pasqual Maragall, de investigar la corrupción de CiU. El ex presidente se quedó solo y no fue capaz de movilizar el aparato de la Generalitat para aclarar las comisiones del 3% que, supuestamente, cobraba el partido de Jordi Pujol a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Así lo desveló en sus memorias el propio Maragall en una grave acusación que nunca ha sido desmentida y que ha pasado inadvertida en la vida política catalana.

«Es verdad, no se quiso profundizar ni desde el partido, ni por parte de miembros socialistas del Gobierno de entonces», admite ahora a este diario un dirigente del PSC en aquella época.

El primer secretario del PSC era en la época José Montilla; el líder de Esquerra, Josep Lluís Carod-Rovira, y el de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura. Ninguno de ellos mostró interés en esclarecer los hechos, según critica el ex presidente, que especula que el motivo fue la sensibilidad que tienen todas las fuerzas políticas «con el tema nunca resuelto de su financiación».

Maragall realiza esta dura revelación en su libro *Cada invocada*, publicado en noviembre de 2008 antes de que se agudizara su enfermedad de Alzheimer. En ella dedica un ca-

pítulo a su alusión al famoso cobro del 3% en comisiones de CiU en un debate sobre el accidente del túnel de metro en el barrio barcelonés del Carmel.

«Mi sorpresa no fue que todo el mundo me criticara por la inoportunidad de mis palabras (ya me he hecho a la idea de que esto ha sido habitual), sino que la mayoría mostrara también su desacuerdo con el fondo del hecho, con la necesidad de investigar la existencia de una manera de actuar incompatible con la honestidad exigible a los gobernantes. Nadie quiso profundizar en la cuestión, estrechamente ligada al tema nunca resuelto de la financiación de los partidos, más allá de atribuirme un error más».

Y cuando Maragall dice «nadie» aclara que se refiere no sólo a CiU, sino incluso a sus propios compañeros de partido y socios en el tripartito que dirigía la Generalitat tras vencer en las elecciones de 2003 al partido de Artur Mas. «Ni siquiera mi partido me apoyó [su líder, Montilla, era en la época ministro de Industria



Maragall y Mas, en el debate del 3%, en 2005. / QUIQUE GARCÍA

de Zapatero). Es sabido que el PSC ha sido tradicionalmente moderado en la denuncia de sus adversarios (...) pero creo que en el caso del 3% se pecó por exceso», sostiene el ex político catalán.

«Aquellos días constaté que la vo-

luntad de un presidente de la Generalitat no hace suficiente palanca para que se logre mover una administración, ni un Gobierno cuando no comparten esa voluntad. En este punto se hizo evidente que ningún consejero [su consejero en cop era Carod-Rovira], ningún partido de la coalición, ni por supuesto de la oposición estaban dispuestos a seguir adelante con una investigación oficial sobre una sospecha que sobrevuela tradicionalmente a la clase política en su conjunto», se lamenta.

«La soledad es un severo inconveniente del político con responsabilidades de gobierno. Pero cuando es fruto de una inexplicable resistencia de los demás a afrontar un problema sustancial para la democracia, un problema cuya resolución se cree

ineludible, resulta terrorífica. (...) La soledad se puede superar, pero no la creencia de que tus compañeros de la dirección del partido han pasado de tolerarte con más o menos simpatía por tus ideas a abandonarte y discrepar abiertamente de ti».

## Manifiesto de juristas por la unidad jurídica de España

Madrid

Un grupo de conocidos juristas defiende, en una declaración hecha pública ayer, la unidad jurídica de España ante el debate sobre la independencia de Cataluña.

Según el manifiesto, «toda vía que implique la vulneración del ordenamiento jurídico supone un ataque a la democracia, porque la democracia no es sólo el gobierno del pueblo sino la garantía de la primacía de la Ley y del Estado de Derecho».

«Por eso», añade, «vulnerar la Constitución y las leyes en nombre de la democracia supone un acto de demagogia que produciría una grave inseguridad jurídica y la quiebra, por su politización, de los derechos fundamentales de los ciudadanos».

Entre los firmantes figuran Juan Antonio Sagardo, Rafael de Mendizábal, José María Alonso, Joaquín de Fuentes, Gaspar Ariño, Mateo Díez Vergara, Ramón Peláez y Álvaro Rodríguez Beretejo. El portavoz del grupo promotor de la declaración es el abogado Javier Cremades.

Los firmantes expresan su «preocupación» por la «postura de algunos líderes políticos nacionalistas que afirman su intención de desvincularse unilateralmente del marco constitucional al margen del procedimiento previsto en nuestra Carta Magna». «El ordenamiento no es inmutable», señalan, pero para su reforma «es imprescindible seguir los procedimientos jurídicos previstos».